



# Reacciones internacionales marcan cautela y división tras la detención de Nicolás Maduro



**A**l día de hoy, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro continúa generando reacciones relevantes en la comunidad internacional, dejando en evidencia no solo la profundidad de la crisis venezolana, sino también las tensiones políticas y jurídicas que atraviesan al sistema internacional frente al uso de medidas unilaterales. De acuerdo con reportes de agencias internacionales como Reuters, AP y AFP, durante los últimos días la mayoría de los gobiernos ha optado por declaraciones cautelosas, evitando respaldos explícitos a la operación que derivó en la detención del mandatario.

Desde el plano jurídico, especialistas citados por medios como The New York Times y El País han reiterado, en análisis publicados entre el 3 y el 4 de enero, que el Derecho Internacional no ampara este tipo de acciones cuando se ejecutan fuera de un marco multilateral claro. En ese sentido, han señalado que una detención de esta naturaleza solo podría contar con sustento legal si se enmarca en una cooperación formal con la Corte Penal Internacional (CPI). Esta hipótesis, sin embargo, se ve debilitada por el hecho de que Estados Unidos no es Estado Parte del Estatuto de Roma, elemento que, según académicos consultados, introduce serias dudas sobre la legalidad del procedimiento.

En América Latina y Europa, según despachos diplomáticos difundidos por AFP hasta este domingo 5 de enero, ha predominado un discurso orientado a la contención y a la defensa del principio de no intervención. Diversos gobiernos han manifestado preocupación por el precedente que podría sentarse si se normalizan este tipo de acciones, subrayando que avalar una intervención de esta naturaleza podría abrir la puerta a escenarios similares en otros países, con efectos directos sobre la estabilidad del sistema internacional.

China y Rusia, en tanto, han sido las voces más críticas durante las últimas jornadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en declaraciones recogidas por la agencia estatal Xinhua, condenó la detención calificándola como una grave violación del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela, reiterando su oposición a cualquier forma de

injerencia externa y llamando a resolver la crisis venezolana mediante el diálogo político interno. Desde Beijing se insistió en que el uso de mecanismos coercitivos solo contribuye a profundizar los conflictos y a debilitar el orden internacional basado en reglas.

Por su parte, el Kremlin, a través de declaraciones difundidas por TASS y Reuters durante el fin de semana, acusó a Estados Unidos de actuar al margen de la legalidad internacional y de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Rusia sostuvo que la detención de Maduro constituye un acto de presión ilegítima contra un gobierno soberano y advirtió que este tipo de acciones afectan negativamente los esfuerzos diplomáticos y elevan el riesgo de tensiones regionales.

Mientras tanto, sectores de la oposición venezolana han expresado, según recoge la prensa internacional en publicaciones recientes, posiciones ambivalentes. Por una parte, reconocen el impacto simbólico que supone la detención del mandatario, pero por otra denuncian haber sido progresivamente abandonados por la comunidad internacional en su confrontación con un régimen que califican como dictatorial, especialmente tras las denuncias de fraude electoral registradas en 2024. En este contexto, analistas políticos advierten que el gobierno venezolano podría capitalizar el escenario actual para reforzar su narrativa de victimización frente al denominado imperialismo estadounidense.

Finalmente, expertos consultados por centros de estudios y think tanks internacionales coinciden en que, a comienzos de 2026, este episodio vuelve a poner en evidencia el fracaso de la diplomacia internacional, particularmente de los mecanismos latinoamericanos, para articular una salida política y pacífica a la crisis venezolana. Asimismo, señalan que el componente ideológico sigue influyendo de manera decisiva en la lectura global del conflicto, otorgando mayor indulgencia política y mediática a gobiernos identificados con la extrema izquierda, lo que condiciona la respuesta internacional frente a vulneraciones democráticas de similar gravedad.

